



**REPUBLICA DE COLOMBIA**  
**TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE MEDELLIN**  
**SALA QUINTA DE DECISION LABORAL**

Proceso:	Ejecutivo conexo
Radicación:	05001-31-05-009-2022-00148-01
Demandante:	Juan Carlos López Zapata
Demandado:	Protección S.A.
Asunto:	Apelación
Procedencia:	Juzgado Noveno Laboral del Circuito
Magistrada ponente:	Dra. Sandra María Rojas Manrique
Temas:	Mandamiento de pago

**Medellín, agosto nueve (09) de dos mil veintidós (2022)**

En la fecha, la Sala Quinta de Decisión Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín, integrada por los magistrados JULIO RAFAEL TORDECILLA PAYARES, VICTOR HUGO ORJUELA GUERRERO y SANDRA MARIA ROJAS MANRIQUE, como magistrada sustanciadora, decide el recurso de **Apelación** interpuesto por el señor apoderado de la parte ejecutante, en contra del auto proferido por el Juzgado Noveno Laboral del Circuito de Medellín, el 6 de mayo de 2022, por medio del cual se libró mandamiento de pago en el proceso ejecutivo conexo de la referencia.

**1. ANTECEDENTES**

El señor Juan Carlos López Zapata, promovió demanda ejecutiva laboral en contra de Protección S.A., pretendiendo se libre orden de pago por la suma de \$97.112.304, por concepto de capital causado por mesadas insolutas de la pensión de invalidez, calculadas desde el 1° de enero de 2012 hasta el 31 de marzo de 2022; por las mesadas pensionales que se sigan causando hasta el momento en que se verifique el pago total de la obligación, asimismo, por la suma de \$18.323.100 por concepto de indexación causada por las mesadas insolutas de la pensión de invalidez, calculada desde el 1° de enero de 2012 hasta el 31 de marzo de 2022 y la que se cause hasta la fecha del pago.

En providencia del 6 de mayo de 2022, el Despacho cognoscente libró mandamiento de pago a favor del señor JUAN CARLOS LÓPEZ ZAPATA y en contra de PROTECCIÓN S.A., por la suma de \$24.971.650 como retroactivo pensional liquidado desde el 01 de enero de 2012 hasta el 31 de marzo de 2015, por las mesadas causadas a partir del 1° de abril de 2015 y las que se causen hasta el pago efectivo de la obligación y negó la suma pretendida por concepto de indexación.

## **2. APELACIÓN DE LA PARTE EJECUTANTE**

El mandatario judicial del ejecutante, interpone recurso de apelación contra el auto que libró el mandamiento de pago, ante la negativa de librar orden de ejecución por la indexación, argumentando que si bien no desconoce que dentro de la providencia que motiva la interposición de la demanda ejecutiva, no quedó expresamente consagrada la indexación de las mesadas pensionales insolutas, no cabe duda que dicho tópico constituye un asunto que opera de pleno derecho, o lo que es igual, por ministerio de la ley, y que por tanto no requiere de autorización, ni pronunciamiento judicial para su operancia, esto implica que el que no se haya realizado una manifestación expresa por parte del operador judicial en manera alguna, constituye una negación de tal

posibilidad que, se repite, representa forma llamada por excelencia a suplir los intereses moratorios del artículo 141 de la Ley 100 de 1993, a efectos de paliar los efectos de la inflación de la economía.

Adicionalmente, sostuvo que, de forma reciente, la jurisprudencia laboral tejida por la Sala Laboral en sentencia SL 359 del 3 de febrero de 2021, tiene decantada una postura similar a la que se reclama, por lo que solicita se revoque la decisión de primer grado en el aspecto puntual controvertido relacionado con la indexación y en su lugar, se disponga la orden de apremio en la forma solicitada con el escrito de demanda.

### **3. ALEGATOS DE ALEGATOS DE SEGUNDA INSTANCIA**

Dentro de la oportunidad procesal para presentar alegatos de conclusión, se pronunciaron los apoderados de las partes. El vocero judicial de la parte ejecutante indicando que no reviste acierto la negativa de librar mandamiento de pago por la indexación, por cuanto dicha actualización monetaria es un asunto que opera de pleno derecho y no requiere, ni siquiera ser objeto de pedimento en la demanda para que el operador judicial la estime, además, acolitar la postura descrita por el fallador, implicaría, propinar un desgaste innecesario a la jurisdicción en disfavor del principio de economía procesal, sin que se puedan trasladar injustamente al demandante los efectos nocivos de la pérdida del poder adquisitivo de la moneda por el paso del tiempo.

Por su parte, la apoderada de Protección S.A., es insistente en que dentro del proceso ejecutivo conexo no hay lugar a librar mandamiento de pago por la indexación solicitada, por cuanto no existe ningún título ejecutivo que declare que Protección S.A., deba indexar las condenas impuestas en la sentencia de segunda instancia, razón por la cual, el reconocimiento y pago de la indexación

debe reclamarse por la vía ordinaria, mediante un proceso declarativo y no por vía ejecutiva.

#### **4. CONSIDERACIONES**

##### **4.1. Competencia de la Sala**

La competencia de esta Corporación está dada por los puntos que son objeto de apelación, entendiendo que las partes quedaron conformes con los demás aspectos decididos; de conformidad con el art 57 de la Ley 2ª de 1984; los artículos 10 y 35 de la Ley 712 de 2001, que modificaron los artículos 15 y 66A del C.P.L y de la S.S., respectivamente.

##### **4.2. Problemas Jurídicos**

Debe la Sala determinar:

¿Si es procedente revocar parcialmente el mandamiento de pago proferido por el señor Juez Noveno Laboral del Circuito de Medellín el 6 de mayo de 2022, en cuanto negó librar mandamiento de pago por la indexación de las mesadas pensionales, para en su lugar impartir orden de pago por dicho concepto?

##### **4.3. Tesis**

El problema jurídico se resuelve bajo la tesis según la cual, no es procedente librar orden de pago en contra de Protección S.A., por la indexación de las mesadas pensionales, por no existir título ejecutivo que respalde dicha pretensión, razón por la cual se confirmará el auto recurrido.

#### **4.4. Premisas Normativas**

##### ***Naturaleza del proceso ejecutivo laboral***

Se precisa, que el proceso ejecutivo laboral es la vía procesal a través de la cual el trabajador, afiliado u acreedor busca el cumplimiento coactivo de una obligación, clara, expresa y exigible, que tiene su fuente en una relación de trabajo, contenida en un documento, privado o público, o en una sentencia judicial.

El artículo 100 del Código Procesal del Trabajo y la Seguridad Social, regula la procedencia de la ejecución, en los estos términos:

*“Artículo 100. Procedencia de la ejecución. Será exigible ejecutivamente el cumplimiento de toda obligación originada en una relación de trabajo, que conste en acto o documento que provenga del deudor o de su causante o que emane de una decisión judicial o arbitral firme.*

*Cuando de fallos judiciales o laudos arbitrales se desprendan obligaciones distintas de las de entregar sumas de dinero, la parte interesada podrá pedir su cumplimiento por la vía ejecutiva de que trata este Capítulo, ajustándose en lo posible a la forma prescrita en los artículos 987 y siguientes del Código Judicial, según sea el caso”.*

En esta misma perspectiva el artículo 422 del código General del Proceso, establece:

*“Artículo 422. Título ejecutivo. Pueden demandarse ejecutivamente las obligaciones expresas, claras y exigibles que consten en documentos que provengan del deudor o de su causante, y constituyan plena prueba contra él, o las que emanen de una sentencia de condena proferida por juez o tribunal de cualquier jurisdicción, o de otra providencia judicial, o de las providencias que en procesos de policía aprueben liquidación de costas o señalen honorarios de auxiliares de la justicia, y los demás documentos que señale la ley. La confesión hecha en el curso de un proceso no constituye título ejecutivo,*

*pero sí la que conste en el interrogatorio previsto en el artículo 184”.*  
(subraya de la Sala)

Las sentencias judiciales prestan mérito para la ejecución, estando obligado el deudor al cumplimiento conforme a la literalidad de la providencia judicial.

#### **4.5. Del caso concreto**

En este sublite, el título de ejecución corresponde a la sentencia de segunda instancia proferida por esta Corporación, el 17 de abril de 2015, por medio de la cual se revocó la sentencia emitida el 29 de octubre de 2014 por el juzgado Noveno Laboral del Circuito de Medellín, en el proceso ordinario laboral que se adelantó bajo el radicado 050013105009201200978.

Dispuso el fallo de segunda instancia lo siguiente:

*“Primero: Revocar la sentencia de primera instancia en todas sus partes y en su lugar, condenar a la demandada PROTECCION SA a reconocer y pagar al señor Juan Carlos López Zapata, identificado con cedula 71.749.554, pensión de invalidez a partir del 1º de enero de 2012 en cuantía de un salario mínimo legal mensual vigente, sin perjuicio de los incrementos de ley por las razones aquí expuestas.*

*Segundo: Condenar a la demandada PROTECCIÓN a reconocer y pagar al demandante Juan Carlos López Zapata el retroactivo pensional hasta el 31 de marzo de 2015, el cual asciende a la suma de \$24.971650, por las razones aquí expuestas.*

*Tercero: condenar en costas en ambas instancias a la entidad demandada, las agencias en derecho se fijan en la suma de \$1.000.000”.*

Para resolver el disenso de la parte ejecutante respecto a la negativa de librar orden de pago por la indexación de las mesadas pensionales, señala la Sala que le asiste razón al funcionario de primer grado, toda vez que, como se observa,

la indexación no fue ordenada en la sentencia de segunda instancia y, por lo tanto, no existe título que respalde la ejecución por tal concepto.

Se relieves que la obligación a cargo del deudor que da lugar a la acción ejecutiva debe ser clara, expresa y exigible. *“Es clara la obligación que no da lugar a equívocos, en otras palabras, en la que están identificados el deudor, el acreedor, la naturaleza de la obligación y los factores que la determinan. Es expresa cuando de la redacción misma del documento, aparece nítida y manifiesta la obligación. Es exigible si su cumplimiento no está sujeto a un plazo o a una condición, dicho de otro modo, si se trata de una obligación pura y simple ya declarada.”* (Corte Constitucional sentencia T 747 de 2013).

De otro lado, si bien es cierto, como lo sostiene el apelante, que a la luz de la jurisprudencia actual de la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, el operador judicial puede ordenar oficiosamente el reconocimiento de la indexación de las mesadas pensionales, a fin de procurar el mantenimiento del poder adquisitivo de la moneda (sentencia SL359 de 2021), ello no implica que la indexación opere de pleno derecho o que no requiera pronunciamiento judicial, pues el precedente no va más allá de definir la procedencia de ordenar en la sentencia la indexación de las condenas, aun cuando no se haya formulado tal pretensión.

Se precisa que esta Sala de Decisión Laboral ha atendido la tesis planteada por el órgano de cierre de la jurisdicción ordinaria laboral y conforme a la misma ha ordenado oficiosamente en sede apelación y consulta el reconocimiento y pago de la indexación, sin embargo, dicha facultad oficiosa es propia de los procesos ordinarios o declarativos, en los cuales está en discusión la existencia del derecho, no así para los juicios ejecutivos, en los cuales lo que se persigue el cumplimiento coactivo de una sentencia previa y en tal sentido, debe ajustarse el funcionario judicial a la literalidad de la providencia que se ejecuta, pues en ningún evento le es dable alterar o modificar el título ejecutivo, razón

por la cual, no es posible acoger la interpretación abanderada por el apoderado del ejecutante.

Conforme a lo expuesto, y toda vez que, se itera, la indexación hoy pretendida no fue ordenada en la sentencia que fundamenta la ejecución, no existe título ejecutivo, pues no existe una obligación expresa y por ende tampoco exigible.

Por lo esbozado se impone la confirmación del auto proferido el 6 de mayo de 2022.

Sin costas en esta instancia.

## 5. DECISION

En mérito de lo expuesto la Sala Quinta de Decisión Laboral del Tribunal Superior de Medellín,

### RESUELVE

**Primero: CONFIRMAR** el auto proferido el 6 de mayo de 2022, por el Juzgado Noveno Laboral del Circuito de Medellín, dentro del proceso ejecutivo conexo adelantado por el señor JUAN CARLOS LOPEZ ZAPATA en contra de PROTECCIÓN S.A.

**Segundo:** Sin **COSTAS** en esta instancia.


**Tercero:** Se ordena la devolución del expediente digital al Juzgado de origen, con las actuaciones cumplidas en esta instancia.



Lo resuelto se notifica por **ESTADOS**, de conformidad con el literal c) del artículo 41 del Código Procesal del Trabajo y la Seguridad Social.

Los Magistrados,

  
**SANDRA MARIA ROJAS MANRIQUE**

  
**JULIO RAFAEL FORDECILLA PAYARES**

  
**VÍCTOR HUGO ORJUELA GUERRERO**

La presente providencia fue notificada por estado No140 fijado en la secretaría de la sala del Tribunal Superior de Medellín, a las ocho de la mañana (8:00 a.m.) del 10 de agosto de 2022.

RUBEN DARIO LOPEZ BURGOS

Secretario